

Plaza pública

para la edición del 19 de febrero de 1995

Sureste explosivo

Miguel Ángel Granados Chapa

La Rosa de los Vientos de nuestra atención y nuestras preocupaciones nos hará dirigir la mirada, este fin de semana, al Norte, pues en Washington se resolverá el tan esperado paquete de apoyo financiero; al Occidente, pues en Jalisco se ratificará el reemplazo del PRI por el PAN como partido dominante; y al Sureste, en tres de cuyas entidades subsisten, resurgen o se anuncian conflictos: El estallido de dos ductos en Tabasco se produjo en un entorno donde el ambiente negociador no reemplaza aún a la disputa posterior a las elecciones de hace ya tres meses. En Yucatán el PRI se dispone, con sus peores formas de hacer política, a impedir que esa entidad sea gobernada por Acción Nacional. Y Chiapas vive en el filo de la navaja.

Lejos de asentarse, la economía sigue viviendo una extraña mezcla de turbulencias y marasmo. Del resultado se quejan ahora hasta los dirigentes empresariales, a menudo proclives al optimismo, surgido de la coincidencia de sus visiones e intereses con la política económica gubernamental. Haya sido una acción concertada o no (y en ambos casos la coincidencia es significativa), los líderes de la Concamín, la Coparmex y el propio Consejo Coordinador Empresarial dieron señales de impaciencia, menos expresas sin embargo que

las ofrecidas por los mercados cambiario y bursatil. Y es que en efecto la economía va secándose, con efectos graves no sólo para la sociedad (pues cunde el desempleo y el malestar consiguiente) sino para la propia estructura productiva. Y es que en este campo no se ha dado el gran viraje necesario para remontar la crisis. El hecho mismo de que se aguarde con gran esperanza la conclusión de las negociaciones para que el gobierno de Washington apronte los veinte mil millones de dólares ya anunciados reitera la dependencia mexicana del exterior. Ese ingrediente ha estado en la base de los fracasos y frustraciones de la política económica, y en vez de empeñarse en eliminarlo, el gobierno persiste en él. Adicionalmente, en este grave episodio se muestra el error de festinar los acontecimientos. Dar por hecho lo que apenas es expectativa produce confusiones en el ánimo público. Hace ya tres semanas que el Presidente Clinton asumió el 31 de enero su papel de salvador de la economía mexicana, pero es tan profunda la ciénaga en que nos ahogamos, que las cuerdas para el rescate no acaban de llegar a nuestras manos. Mientras tanto, la cotización del dólar revela cuán distante está aún el momento en que se conozca la verdadera dimensión de una crisis cuyos efectos se ahondan día con día.

De Guadalajara surgió, el miércoles 15, la noticia que reencendió los focos rojos de la desconfianza internacional sobre México. El Grupo Sidek resolvió no cubrir un adeudo cercano a veinte millones de dólares que debía encarar ese día, con objeto de destinarlos a mantener el ritmo de sus operaciones. Esa decisión no

puede ser descalificada ni tenida sólo como un acto de irresponsabilidad. Así la estimaron los acreedores internacionales, y en tal sentido reaccionaron las bolsas de valores. Pero lo hecho por Sidek apunta quizá a la única alternativa que la crisis deja a las empresas en dificultades y por lo tanto al país mismo. Si se debe escoger entre la economía especulativa y la productiva, tal vez no sea una elección descabellada, aun considerando sus muchos riesgos e implicaciones, la de privilegiar el apoyo sustantivo a la producción, por encima de los compromisos con la banca y otros acreedores.

También de Jalisco partió la única información política electoral saludable (en su doble sentido de sana y digna de saludo) ocurrida esta semana. Me refiero tanto a la transparencia del proceso de elecciones como a su resultado. Alberto Cárdenas Jiménez, el virtual gobernador electo (lo será formalmente a mitad de la semana próxima, pues hoy recibirá su constancia de mayoría) había previsto que además de su propio triunfo, Acción Nacional lo obtendría en "cerca de unas 70 alcaldías, y al menos unas 13 ó 14 diputaciones locales" (*La Nación*, 16 de enero). Se excedió en su optimismo sobre los ayuntamientos, pero se quedó corto en su previsión legislativa. Habrá gobierno panista en 54 de los 124 municipios, pero la importancia de esa victoria se resalta con la doble consideración de que se incluyen las mayores ciudades, y que el PRI disminuyó su dominio a exactamente la mitad de las municipalidades.

El Congreso local se compondrá por una abrumadora mayoría panista (más acentuada aún que las obtenidas en Baja California o Chihuahua). A sus 17 triunfos en los 20 distritos uninominales, Acción Nacional agregará 7 más de representación proporcional, mientras que el PRI dispondrá de tres de mayoría y nueve plurinominales. O sea que aunque cuente todavía con dos senadores y diez diputados federales, el partido hasta ahora oficial deberá pasar a la intemperie de la oposición, lo que eventualmente disminuirá aún más su presencia, sobre todo si alguno de sus dirigentes asume una posición en el gobierno panista.

En efecto, Cárdenas Jiménez ha previsto integrar a su gobierno a ciudadanos independientes o miembros de otros partidos, y no sólo panistas. El diario tapatío Siglo XXI recogió en su edición del miércoles 15 versiones de que varios priístas, incluido el ex gobernador Flavio Romero de Velasco, están siendo considerados para el gabinete que comenzará a trabajar el primero de marzo próximo. Si bien una experiencia en sentido contrario (el nombramiento del ex diputado panista José de Jesús Martínez Gil en el gobierno actual) fue más bien casual, quizá se aproxima la hora en que la proximidad entre el PRI y el PAN los invite a cogobiernos claros allí donde sus diferencias se han resuelto con tersura.

Eso sería imposible entre el partido gubernamental y el de la Revolución Democrática, al menos en el muy corto plazo. En Tabasco se diluyó de nuevo el viernes, apenas reiniciada, la sola posibilidad del dialogo entre ambas formaciones, antagonizadas por el resultado

electoral del 20 de noviembre pasado. Un ingrediente ajeno a ese litigio, que pudo haberse sido incorporado de mala manera al proceso postelectoral ha sido hasta ahora abordado con sensatez. Fue en efecto muy saludable que desde las primeras horas del viernes 17, altos funcionarios de Petróleos Mexicanos renunciaran a atribuir a sabotaje la rotura e incendio de un gasoducto y un gasolinoducto, que causaron la muerte de una persona y lesiones graves a por lo menos 18 más, que siguen hospitalizadas.

En diciembre y enero, como parte de la impugnación perredista al triunfo atribuido a Roberto Madrazo, fue estorbado el acceso a diversas instalaciones de Pemex. Esta empresa promovió denuncias penales contra esos hechos, y como resultado de ellas fueron aprehendidas decenas de personas. A tal situación se agrega la nueva tensión surgida en el vecino Chiapas, donde se han lanzado acusaciones de terrorismo contra zapatistas cuyo vínculo político con el PRD tabasqueño podría ser explotado para incriminarlo en conjuras criminales. Al menos en los primeros momentos se ha impuesto la cordura, y aparte el rechazo explícito a considerar que se trate de un atentado, la dirección de Pemex ha preferido esperar que la Procuraduría General de la República dictamine lo que corresponda.

Las "conversaciones de Teapa" no adelantaron y el conflicto postelectoral siguió en el empantanamiento, algo muy natural en un estado como Tabasco donde abunda el terreno cenagoso. Si alguien está apostando a la prescripción del conflicto, es decir a que el tiempo, que todo lo cura, haga su papel, ha errado el cálculo. la

presencia misma de la Secretaría de Gobernación como instancia mediadora muestra que hay materia para el litigio, que debe resolverse de raíz a riesgo de que sus causas canceren el organismo social. No debe desatenderse más la evidencia surgida de la documentación estudiada por los consejeros del IFE Santiago Creel y José Agustín Ortiz Pinchetti, que reveló la impudicia de la elección local de hace tres meses. Esa evidencia justifica la demanda perredista de que el gobernador Madrazo solicite licencia al menos para que tenga fluidez la prevista consulta sobre si deben efectuarse nuevas elecciones.

La primera piedra de un nuevo conflicto electoral fue puesta ayer, sábado, cuando el PRI consagró candidato a la gubernatura de Yucatán a Víctor Cervera Pacheco. Este impuso de modo avasallador su pretensión de volver al palacio de gobierno donde ya actuó, como interino, de 1984 a 1988. Se ha ratificado así su condición de cacique dotado de poder incontrastable, al menos entre sus compañeros del PRI. Ha sido la figura dominante en la política yucateca desde hace veinte años, con el apoyo de Presidentes como Echeverría y Salinas, lo que habla de su propio talante, aunque también López Portillo le confió la dirección de la CNC y De la Madrid lo llevó a la gubernatura de su estado.

La creciente fortaleza del PAN, y la designación del alcalde meridano Luis Correa Mena como su candidato a gobernador, condujo al PRI a aceptar la falacia de que sólo Cervera Pacheco puede contrarrestar el empuje panista y evitar que Yucatán se sume a la lista de los

estados con gobierno blanquiazul. Algo es cierto: Cervera Pacheco no tendrá escrúpulos políticos a la hora de asegurar su propio triunfo, como lo reveló el que dentro de su propio partido forzara a sus presuntos contrincantes a inclinar la cerviz para apoyarlo, sin siquiera luchar. Digamos, marginalmente, que la reforma priista tuvo en esta primera decisión de los actuales mandos, su primer freno. El dedazo sigue incólume, gozando de cabal salud.

Por acciones de ese género el gobierno enfrenta dificultades de credibilidad. En otro ejemplo, el Presidente Zedillo insistió el viernes en asegurar que el avance militar en Chiapas restableció en las zonas antaño zapatistas el orden jurídico nacional. No ha sido así. La propia presencia del Ejército federal fuera de sus cuarteles es señal de infracción a sus deberes constitucionales. No se repetirá nunca en exceso la disposición constitucional relativa, según la cual "en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar". Los diputados federales Leticia Calzada y Martín Longoria, que acompañaban a un grupo de Pastores por la Paz, fueron impedidos de entrar a la zona donde se asentaban las fuerzas armadas, en clara violación al artículo 11 constitucional, que establece la libertad de tránsito, amén de que la misma infracción afectó durante varios días a los periodistas que necesitaban entrar en la zona. Mientras el Ejército se halle en las comunidades que estuvieron bajo el control zapatista, todo intento de diálogo está excluido.

Tampoco es correspondiente con el orden legal el clima de persecuciones y satanización creado en torno de los presuntos jefes del zapatismo, y que se extiende a centros de educación superior como la Universidad Autónoma Metropolitana. El hostigamiento a militantes de viejo cuño, como el profesor Alberto Híjar, o a instituciones como la Compañía de Jesús y la Orden de Predicadores, son el resultado de acciones dolosas que tienen un claro origen gubernamental.

Sea, por ejemplo, que una fuente oficial manipulara a la agencia Notimex, o que ésta readquiera la vocación propagandística, que no informativa, con que la envenenaron gobiernos anteriores, lo cierto es que la difusión de calumnias y versiones malsanas contribuye al ánimo bélico no a la paz. Eso es particularmente cierto en relación con el obispo Samuel Ruiz, respecto de quien el ex gobernador Eduardo Robledo recibió la consigna de arrastrarlo consigo en su caída, ignorante de las mil diferencias, de todo género, que lo separan de aquel hombre de Dios.

Como quiera que sea, la urgencia de empujar y multiplicar los esfuerzos pacificadores ha de imponerse a toda otra consideración. Ajena a la marejada de maledicencia en su contra, la Comisión Nacional de Intermediación persiste en sus propósitos mediadores. A su turno, la comisión legislativa de conciliación y diálogo se propone retomar su finalidad original, si bien enfrenta el ya expreso rechazo del zapatismo. Otras acciones parlamentarias, como la ley de amnistía, pueden ser un ingrediente pacificador, pero también puede ser lo

contrario, porque impondría condiciones que en la actual circunstancia el zapatismo podría no aceptar. Quizá sea preciso, en consecuencia, imaginar otras formas de actuación de grupos sociales y personajes relevantes, que favorezcan acercamientos entre las partes. Sobre bases de veracidad, todo lo que evite la guerra debe ser bienvenido, pues su peligro no ha sido eliminado.

indicaciones para la edición

1) Sumario

En medio del pasmo económico, que puede conducir a una crisis social, los conflictos políticos (sólo aliviados por el terso proceso electoral jalisciense) crean dificultades crecientes para el entendimiento, especialmente en Chiapas.

2) Primer recuadro (con foto del Presidente Clinton)

Hace ya tres semanas de que el Presidente Clinton apareció, el 31 de enero, como el salvador de la economía mexicana, y apenas ahora están ultimándose las negociaciones para que ocurra la ofrecida asistencia financiera.

3) Segundo recuadro (con foto de Víctor Cervera Pacheco)

Aunque ya fue gobernador (interino, de 1984 a 1988) de Yucatán, el ex secretario de la Reforma Agraria Víctor Cervera Pacheco, figura dominante de la política peninsular en los últimos veinte años, será el candidato priísta, previa rendición de sus contrincantes.